

“Ente autónomo debe encargarse de la gestión de conflictos”

El especialista considera que uno de los principales motivos que dificultan la resolución de episodios de violencia es que el Estado es identificado como un actor interesado en el conflicto. La solución, dice, es que la tarea sea asumida por un organismo imparcial.

FRANCESCA GARCÍA DELGADO
@Fchzk



De los 30 años de experiencia en negociaciones y gestión de conflictos, Guzmán-Barrón se queda con la experiencia de intermediación en la Defensoría del Proyecto Camisea, debido a que los académicos intervinieron con éxito como un organismo imparcial entre el Estado y las comunidades. Eso —para él— nunca se había hecho en el Perú.

—¿Por qué si existe un Sistema Nacional de Prevención de Conflictos, la conflictividad social es todavía uno de los mayores problemas en el Perú?

Cuando ingresó Vladimiro Huaroc [ex jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la PCM], se decidió iniciar un enfoque de prevención, pero del hecho de que existen tantos conflictos infiero que no se está implementando. La intervención temprana implica participación de la empresa desde el principio elemental de decir siempre la verdad y la negociación de la comunidad con la empresa. Ocurre que en esta etapa el Estado no está presente. Aquello termina por ser una negociación privada que por su naturaleza es asimétrica.

—¿Qué genera este escenario con grandes empresas y comunidades que no están preparadas para negociar?

El asesoramiento de terceras personas, quienes pueden o no tener intereses políticos, pero no asesoran adecuadamente, y en algunos casos desinforman. En el país no existen recursos para capacitar a las comunidades en estos temas y creo que uno de los caminos de la prevención de conflictos pasa por fortalecer esas capacidades.

—¿Quién debería invertir? ¿El Banco Mundial? ¿Naciones Unidas? ¿El BID? Tendría que existir un fondo destinado a capacitar a las comunidades sobre cómo negociar y cómo ganar, en el buen sentido de la palabra. Además, capacitarlos en algo fundamental: en qué consiste la actividad minera. Se repite una frase: “Toda mina contaminata”, pero habría que preguntarnos hasta qué punto la contaminación es irremedia-



PROPUESTA. Guzmán-Barrón plantea capacitar a las comunidades para negociar con las empresas.

PERFIL

CÉSAR GUZMÁN-BARRÓN

Profesión: Abogado
Cargo: Director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP.

TRAYECTORIA

Más de 30 años de experiencia en el campo de negociaciones, evaluación y gestión de conflictos.

ble. La idea es que estén preparados para que, en un proceso participativo real, sepan identificar las medidas de mitigación y, en caso de que resulten irremediables, tengan el derecho a negar la entrada a la empresa.

—Una de las preguntas que se repiten siempre es si la actividad minera resulta o no compatible con la agricultura. Ello depende de cada caso. No podemos generalizar ni decir

de plano que son incompatibles. Hagamos primero los estudios y, en función de eso, decidamos. Creo que la actividad minera debidamente controlada, fiscalizada y con medidas de mitigación adecuadas puede ser una excelente oportunidad de desarrollo.

—Si partimos de la prioridad que se da a la actividad extractiva, ¿por qué parece ilusoria la inversión en prevención de conflictos que tienen altos costos sociales y económicos? Hay un problema fundamental de decisión y voluntad política.

—¿Pero hechos como los de Conga, Tía María o Las Bambas no quitarían réditos políticos a cualquier gobierno? Por supuesto, por eso creo que el camino es prevenir. Hay distintos enfoques de intervención y entre ellos la prevención es el menos popular. Se trata de desarrollar una política que asegure la presencia del Estado donde se desarrollen actividades extractivas según el plan de desarrollo del país. Ahí deben estar aliados todas las instancias de gobierno, las ONG, la Iglesia Católica o cualquier otro tipo de iglesia presente.

—Antes de la crisis en Las Bambas se advirtió sobre la necesidad del seguimiento del proyecto. ¿Qué falló?

Falló justamente el seguimiento por parte del sector encargado. Me parece que no hay un grado de entendimiento entre la ONDS y la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. No hay una política integradora, cada sector anda por su lado.

—¿Por razones políticas? Es un tema político que, lamentablemente, no hace bien al país.

Todos queremos desarrollo sostenible y que tanto el sector extractivo como las comunidades pongan de su parte. Existe la necesidad de tener una política integral de manejo, prevención y gestión de conflictos sociales. Ese es un tema muy serio y, si no se entiende ahora, se entenderá con un nuevo gobierno.

—¿Identifica aciertos en la política de gestión de conflictos actual?

El gobierno ha empezado a organizar mesas de desarrollo que van más allá de las de diálogo. Ahí se convocan a funcionarios de educación, salud y otros sectores, y los comprometen a atender demandas, pero la mesa de desarrollo se reúne cuando

estamos en etapa de gestión de crisis y no de prevención.

—Según la intervención y los estudios que ustedes han realizado, ¿cuál es el escenario al que debemos aspirar?

Lo ideal, aunque puede sonar a una quimera, es un pacto social entre Estado, empresa y comunidades. El pacto para nosotros fija un conjunto de compromisos entre todos los involucrados y una suerte de comisión de seguimiento, donde existan sanciones si los compromisos son incumplidos.

—¿Aunque el gobierno suela ser percibido como un actor a favor de las empresas?

Cuando estuvimos en la Defensoría de Camisea [que gestionó la solución de conflictos mientras se construyó este proyecto], impusimos el concepto de puente de entendimiento. ¿Quién debería ser ese puente? Según la norma, es el Estado; pero si es el Estado el que aprueba un EIA cuestionado y si cuestionan su intervención policial, es válido preguntarse si es parte o no del conflicto o si le corresponde solucionar el conflicto.

ORGANIZACIÓN

En el 2003, la Universidad Católica crea el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos como institución neutral.

—¿Qué sugieren?

Nuestra sugerencia es un tercero intermediario que sea ese puente que gane la confianza de todos, que no esté politizado y que dure en el tiempo. Estoy convencido de que debe pensarse en un nuevo diseño político con un ente independiente, autónomo y profesional, con recursos de la cooperación técnica, que se encargue de la prevención y gestión de conflictos. Creo que el costo será mucho menor de lo que hoy cuestan las vidas y los millones de dólares que se pierden.

—¿La movilización popular se ha perfeccionado y ha hecho de eso una estrategia de negociación?

Sí, porque ya saben que si se organizan, queman llantas, levantan banderas, el gobierno responde. Eso es porque no hemos creado una instancia administrativa que canalice el reclamo. Si lo tuviéramos, sería distinto ante la oposición a un proyecto. Se pedirían razones escritas y formales. Que no exista eso es inaudito.

ANTECEDENTES

En octubre del 2012 se creó la ONDS como órgano técnico especializado para gestionar las diferencias, controversias y los conflictos sociales en el país. José Ávila, ex viceministro de Derechos Humanos, fue designado el pasado 11 de octubre nuevo jefe de la oficina. Es el cuarto desde su creación.

214

es la cantidad de conflictos sociales que registró la Defensoría del Pueblo hasta setiembre. De ellos, 150 se encuentran en estado activo y 64 están latentes. De esta cantidad, el 66% tienen un origen socioambiental, en su mayoría por proyectos mineros.

TÍA MARÍA

El proyecto cupifero se encuentra en gestión de crisis, luego de que este año murieran cuatro personas debido a las protestas. La empresa Southern Perú tiene el proyecto en espera.

LAS BAMBAS

El gobierno ha iniciado talleres informativos en la zona de influencia del proyecto para regenerar la confianza en la población.



La violencia en Las Bambas costó tres vidas en setiembre.

6

años fue el tiempo que duró la Defensoría del Proyecto Camisea. El Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP trabajó como organización independiente para prevenir y mediar los conflictos durante la construcción de este proyecto.

CAMBIO DE JEFATURA

Luego de la renuncia de Vladimiro Huaroc en diciembre del 2014 la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) fue liderada por Julio Rojas Sulca y después por David Montoya Chomba.

ACTUAL GESTIÓN

José Ávila, actual jefe de la ONDS, es magister en Derecho Penal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.